

CRISIS ECONÓMICA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL EN CHILE (1981-1984)

FRANCISCO ZAPATA

LA FRUSTRACIÓN del proceso de movilización de los actores sociales que tuvo lugar en Chile entre 1983 y 1984 debe ser objeto de análisis desde el punto de vista de las consecuencias que ella puede tener para el futuro político del país.¹ La crisis económica del período 1981-1982 que antecede dicha movilización tiene varias dimensiones que siguen trayectorias diferentes pero interrelacionadas. Por una parte, es posible argumentar que los problemas que experimentó la economía del país condicionaron la aparición de la movilización social a la vez que dieron lugar a otros fenómenos, como la reconstitución del sistema político del país, la gestión de la recuperación del consenso perdido al nivel de la sociedad civil, y la revelación de que la estructura socio-económica había experimentado transformaciones sustantivas desde el golpe de Estado de 1973. Estas consecuencias permitan observar el impacto que había tenido la política económica de los *Chicago Boys* sobre la génesis de la movilización social y visualizar también las repercusiones que podía tener la formulación de un nuevo consenso sobre la redefinición del sistema político. Sin embargo, esta postura, que se limita al análisis de la coyuntura, debe ser profundizada.

Pensamos que es necesario ir más allá de la lógica de los acontecimientos. Hay que ver que tanto en la economía como en la sociedad chilena han tenido lugar transformaciones estructurales que constituyen el telón de fondo sobre el cual dicha coyuntura está inscrita. La puesta en duda del régimen militar que tuvo lugar entre 1983 y 1984 reflejó cambios en la estructura de clases; mostró que el espacio político atraviesa por un proceso de redefinición en donde las organizaciones existentes en las poblaciones marginales desempeñan un papel más importante que los sindicatos, tradicionalmente centrales en la acción política; además, mostró que estas organizaciones asumen un papel mucho más directo en la expresión de sus intereses y relegan a los partidos políticos a un segundo plano. Consideramos que estas y otras ideas que surgen al considerar la evolución de la situación chilena en los dos últimos años deben ser analiza-

¹ La presente versión de este análisis recoge las reflexiones puntuales realizadas en "Fuerzas sociales y actores políticos en Chile", *Le Monde Diplomatique en español*, diciembre de 1983, y en la conclusión al libro colectivo *Clases sociales y acción obrera en Chile*, México, El Colegio de México, 1985.

das en la perspectiva de la evolución general del país en la última década.² A partir de ahí podremos conocer mejor cómo se ha reestructurado la relación entre estructura social, actores sociales y acción política, y dimensionar a partir de ahí las posibilidades de cambio de dicha situación. Este propósito será abordado refiriéndonos al impacto de la política económica en la génesis de la movilización, a los elementos que permiten afirmar que el sistema político chileno se está redefiniendo y, finalmente, a las bases objetivas que puede tener el proyecto de lograr un nuevo consenso social en el país.

CRISIS ECONÓMICA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL (1981-1984)

Fue a partir de la crisis económica desencadenada a lo largo de 1982³ que se puso en marcha la dinámica de movilización que se inició en marzo de 1983. Cuando a fines de 1981 el gobierno tuvo que intervenir el aparato financiero, anticipándose a una insolvencia del mismo, se sintió la señal de que algo andaba mal en la puesta en práctica del modelo de los *Chicago Boys*. Varios bancos pasaron a ser administrados por la Superintendencia de Bancos y Compañías de Seguro, con lo cual el mito del Estado liberal no interventor se vino al suelo. Más tarde, en junio y agosto de 1982, las sucesivas devaluaciones del peso con respecto al dólar (que lo llevaron de 39 a 46 pesos por dólar y más adelante a 70, 112 y 144 en enero de 1985), reforzaron la crisis de confianza que se había iniciado con la intervención de los bancos y la quiebra de algunas grandes empresas. Además, el deterioro del aparato industrial, sometido a ofensivas ligadas a la baja de los aranceles, mostraba los resultados concretos de la apertura al exterior. El Producto Nacional Bruto decrecía en un 14.1% entre 1981-1982, conformando un cuadro dramático en la economía de un país que todavía en 1980 era mostrada como ejemplo del funcionamiento del planteamiento liberal.

No obstante las afirmaciones tajantes de los economistas de Chicago en cuanto a la bondad que las medidas adoptadas tenían desde el punto de vista de la inserción de la economía chilena al contexto internacional, la competitividad de la industria chilena no se había incrementado: en 1978, el valor real de las exportaciones chilenas era inferior en un 10% al de 1970, mientras que el valor de las importaciones era un 38% más alto. Los cambios en la distribución sectorial del producto y del empleo sugerían que la aparente intensificación del crecimiento obedecía a la dinámica del sector comercial y financiero,

² Véase Sergio Spoerer, "Chili 1981-1983", crise institutionnelle et acteurs socio-politiques", *Problèmes d'Amérique Latine*, núm. 72, 1984. Para una visión panorámica del período 1973-1981, véase el número especial de la *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 2, 1982.

³ Véanse Álvaro García Hurtado, "The Political Economy of the Rise and Fall of the Chicago Boys", Centre for Latin American Studies, University of Cambridge, *Working Paper*, 38, 1983. Carlos Fortín, "The Failure of Repressive Monetarism: Chile, 1973-1983", *Third World Quarterly*, abril de 1984, y Carlos Ominami, "Le miracle économique chilien: la fin d'un mythe", *Problèmes d'Amérique Latine*, núm. 72, 1984.

y no a resultados inéditos en la producción. Los sectores productivos de bienes durables habían disminuido su participación en el total del PNB en un 7% entre 1970 y 1978 (Félix, 1983). El incremento de la productividad del trabajo se explicaba más por la disminución del empleo que por un aumento de los volúmenes de producción.⁴ Todo lo cual indicaba que el milagro económico inducido por la escuela de Chicago era más una ilusión que una realidad.

Sin embargo, si bien es cierto que esta estrategia económica había tenido los resultados señalados y otros que han sido pormenorizados por muchos analistas (García-Hurtado, 1983), es necesario ahondar más en el sentido que pueden tener algunas inversiones realizadas en el sector minero, en la agricultura (fruticultura, ganadería), en la red caminera y en otras áreas de la economía que pueden tener repercusiones en el largo plazo y que repercuten en el grado de estabilidad que pueda asignarse al régimen militar.

La importancia de la diversificación de las exportaciones mineras (véase cuadro 2), más que el incremento del peso de ellas en el total de las exportaciones del país, el cual ha disminuido (véase cuadro 1), muestra que el régimen militar ha tratado de poner en marcha una dinámica de valoración de los recursos minerales del país, apoyado en la lógica de las supuestas ventajas com-

Cuadro 1

Porcentaje de las exportaciones cupríferas como proporción
del valor total de las exportaciones chilenas (1972-1983)
(Millones de dólares)

Año	Valor de las exportaciones de cobre (1)	Valor de las exportaciones totales (2)	1/2 %
1972	631	855	73.8
1973	1 026	1 231	83.3
1974	1 654	2 481	66.7
1975	890	1 661	53.6
1976	1 247	2 083	59.9
1977	1 187	2 190	54.2
1978	1 271	2 478	51.3
1979	1 899	3 894	48.8
1980	2 153	4 671	46.0
1981	1 715	3 906	43.9
1982	1 731	3 710	46.7
1983	1 836	3 836	47.9

Fuente: *International Financial Statistics*, Washington, D.C., 1980-1985.

⁴ Por ejemplo, en el cobre parte importante de la baja del costo medio por tonelada se debe a la baja en el costo de personal, por una mayor productividad y una reducción de más de 1 500 trabajadores entre 1974 y 1982. El costo por trabajador pasa de US\$19.9 en 1981 a US\$16.7 en 1982, una reducción del 16%. El índice de productividad se incrementa en un 22.2%.

parativas que el país tiene en ese campo. La producción y exportación de minerales como el oro, la plata, el molibdeno, el plomo o el zinc experimentan incrementos muy importantes entre 1973 y 1982, que contrastan con la pérdida de posiciones del hierro o los incrementos más moderados del cobre o del manganeso. Ello se ha llevado a cabo a través de la apertura de nuevas explotaciones como son El Indio (oro, plata) y El Toqui (zinc), o de la prospección de nuevas minas de cobre como Los Pelambres, La Escondida, Quebrada Blanca, Cerro Negro, Cerro Colorado, para mencionar sólo algunas de las que son objeto de inversión.

Cuadro 2

Producción de la minería metálica de Chile entre 1973 y 1982
(promedio para el período y variación porcentual entre 1973 y 1982)

<i>Mineral</i>	<i>1973</i>	<i>1982</i>	<i>Variación porcentual (1973-1982)</i>
Cobre	743	1 255	68.9
Molibdeno	4 940	20 048	305.8
Plomo	431	1 552	260.0
Zinc	2 324	5 656	143.4
Hierro	9 416	6 470	- 31.3
Manganeso	14 413	16 111	11.8
Oro	3 226	16 007	424.0
Plata	157	382	143.3

Nota: Cobre, molibdeno y hierro en miles de toneladas métricas; oro y plata en kilos; plomo, zinc y manganeso en toneladas métricas.

Fuente: *Chile Economic Report*, Corporación de Fomento de la Producción, Nueva York, 1984.

La mayor parte de las inversiones realizadas tienen como protagonista al capital extranjero que, a través de algunas grandes empresas transnacionales (St. Joe Mineral Corporation, Utah International, Atlantic Richfield, Foote Minerals, etc.) ha comprometido recursos humanos y financieros para valorizar esas riquezas. Igualmente, las minas ya en explotación (Chuquicamata, El Teniente, La Disputada de Las Condes, etc.) han puesto en marcha planes de expansión que involucran el incremento de la producción de metales como el molibdeno o el manganeso. Desde la entrada en vigencia del decreto 600, referido a la inversión extranjera, el 41% de las inversiones se ha localizado en el sector minero, lo cual equivale a 850 millones de dólares (véase cuadro 3). Esta tendencia, cuyo impacto sobre la estructura económica tardará en verificarse en toda su amplitud, dados los plazos sumamente largos que tiene la valorización del capital en el sector minero, fortalece el restablecimiento de

Cuadro 3

Inversiones extranjeras realizadas, clasificadas por sector,
desde la entrada en vigencia del decreto 600 (1976)
(Miles de dólares)

Sector	Número de proyectos autorizados	Monto de las inversiones realizadas	Porcentaje de las inversiones realizadas sobre las autorizadas
Minería	53	850 524	41.0
Industria	266	502 510	24.2
Servicios	394	560 205	27.0
Construcción	69	97 466	4.7
Agricultura	68	43 350	2.1
Forestal	5	9 786	0.5
Transportes	14	9 445	0.5
Energéticos	2	1 655	—
Total	871	2 074 974	100.0

Fuente: Banco Central de Chile, citado por *Chile Economic Report*, Corporación de Fomento de la Producción, Nueva York, 1984.

la economía volcada hacia el exterior y le da viabilidad al modelo de desarrollo que el régimen militar está tratando de restaurar.

Además, no es sólo en la minería que tiene lugar este proceso, cuyo significado económico en el largo plazo puede ser importante. Incluso las empresas estatales (electricidad, petróleo, siderurgia, construcción naval, etc.) han puesto en marcha programas de inversión cuya realización repercute también en la dinámica señalada anteriormente.⁵ La construcción de la planta hidroeléctrica de Colbún-Machicura, la expansión de la red eléctrica interconectada en el norte del país, la prolongación de la carretera longitudinal hacia la zona austral, las inversiones en la infraestructura agraria por organismos del Estado (INDAP, CORA, SAG, CONAF, etc.), son algunos ejemplos de este proceso. Podemos agregar que la penetración del espacio austral abre una *nueva frontera* y no se limita sólo a cumplir con un propósito geopolítico de integrar al país por vía terrestre. La inversión pública en el sector agropecuario tampoco puede subestimarse. Las inversiones en fruticultura, vitivinicultura, forestación y reforestación, maquinaria agrícola, habilitación de tierras, construcciones agrícolas, ganadería, se expresan en un incremento notable de las exportaciones agropecuarias. La política de precios ha favorecido la producción de cereales, lo cual permitió la autosuficiencia en trigo del país en 1984, lo que no había

⁵ Vale la pena citar la opinión del Banco Mundial en este sentido: "En Chile, las empresas estatales son de las más sólidas en la actualidad", *Chile: an Economic Memorandum*, 24 de septiembre de 1984, p. 17, nota 2.

ocurrido durante varias décadas. Algo similar ocurre con la pesca, que también ha multiplicado varias veces el valor de sus exportaciones, que pasaron de 21 millones de dólares en 1973 a más de 400 millones de dólares en 1982.

Podríamos mencionar también que algunos intereses privados han llevado a cabo algunas inversiones (madera, construcción naval), si bien su impacto ha sido muy marginal al realizado por intereses *transnacionales* o *estatales*. Por ello el nuevo modelo, implementado por el régimen militar, descansa esencialmente en estos dos sectores cuyos efectos sobre la dinámica futura de la economía pueden ser muy significativos. Como ocurrió durante el período de crecimiento hacia afuera, el lugar de la toma de decisiones se traslada al exterior y descansa sobre la evolución de la coyuntura económica internacional. Las necesidades del mercado nacional no son ya las que dictan las decisiones de política económica. Los requerimientos de empleo de la población tampoco figuran entre los criterios utilizados para la fijación de prioridades. El Estado y las empresas transnacionales se interpenetran para establecer un orden de prioridades que sea beneficioso para ambos. Todo lo que no sea funcional a estas prioridades es descartado.

De esta forma, la inversión en infraestructura, en la agricultura y en la minería constituye un impacto que no puede ni debe subestimarse en una evaluación global de la estructura económica de Chile en la actualidad.

A la luz de lo planteado se hace difícil reducir el proceso de movilización social del período 1983-1984 a una simple respuesta a los problemas coyunturales de 1982. En efecto, lo ocurrido es más un cuestionamiento global de toda la estrategia económica que la formulación de un proyecto autónomo de una alternativa a la situación existente. El cuestionamiento asume la estrategia que se puso en marcha y no la acepta. Además, es el resultado de actores sociales muy diferenciados de los actores políticos, que tradicionalmente habían animado la movilización socio-política en el país. Entonces, el cuestionamiento que se expresa en la movilización es el resultado tanto de la crisis coyuntural de 1982 como de la toma de conciencia de las implicaciones que tuvo la puesta en práctica de la estrategia económica del régimen militar en los últimos diez años. La acción emprendida por mineros, transportistas, comerciantes, pobladores, pequeños y medianos industriales endeudados, fue desencadenada a partir de los problemas de 1982 pero a la vez refleja las consecuencias de la restauración del modelo económico orientado hacia el exterior.

Otro factor que impide identificar al movimiento con un proyecto alternativo es la segmentación de las reivindicaciones, asociada a la especificidad de cada actor. Si bien los partidos políticos tratan de canalizar esas reivindicaciones, lo central es que ellas coexistieron sin articularse alrededor de un objetivo que trascendiera la caída del general Pinochet. Gran parte del programa planteado por el llamado "diálogo" (agosto de 1983), culminación de las jornadas de protesta realizadas en 1983, se focalizó en demandar la renuncia del general, lo que en parte contribuyó al fracaso del programa. Es por ello que fue difícil mantener la movilización en un nivel suficientemente intenso y sobre todo guardar la unidad entre la diversidad de sectores sociales comprometidos en

ella. Con excepción de las grandes manifestaciones del primer semestre de 1983, las que tuvieron lugar después fueron insuficientes para quebrar la resistencia del régimen.

Al contrario, el gobierno militar consiguió dividir a la oposición separando las reivindicaciones de las clases medias (transportistas, pequeños y medianos empresarios, propietarios rurales, comerciantes) de las planteadas por los pobladores o los obreros (empleo, salarios, vivienda). Los militares prometieron a cada actor algo de lo que solicitaba y, a fines de septiembre de 1983, era claro que una parte de las peticiones había encontrado una solución o una promesa. Así, los sectores sociales pudientes, endeudados, encontraron una respuesta favorable a su demanda de condonación de deudas, y las presiones de los industriales para mejorar su posición relativa en el mercado se resolvieron con el alza progresiva de los aranceles, los cuales les permiten volver a obtener ganancias. Los "cacerolazos" que habían agitado los barrios altos de la capital, fueron así parcialmente neutralizados.⁶

Pero, al mismo tiempo, el régimen endureció su postura frente a los sectores populares. Después del paro en las minas del cobre en junio, el régimen procedió a encarcelar a algunos dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y a tomar medidas radicales en los campamentos, en donde despidió a muchos obreros que habían participado en el paro, además de militarizar las faenas. Todavía en septiembre de 1984 seguían planteándose demandas de reintegro al trabajo que no fueron satisfechas por el régimen a pesar de haber accedido éste a la mediación de la Iglesia. Despidos, renunciaciones forzosas y procesos judiciales en el cobre, allanamientos masivos en las poblaciones marginales, disparos, detenciones arbitrarias de jóvenes y obreros. Los dirigentes políticos de más figuración fueron encarcelados, pero la presencia de un poder judicial menos servil les permitió recuperar la libertad en corto tiempo.

Frente a la heterogeneidad de la opción que permitió la división a través de la estrategia del régimen militar, y frente a la ausencia de un programa alternativo que diera seguridades a los sectores propietarios, las jornadas nacionales de protesta tomaron un carácter ritual que gradualmente tuvo menos y menos que ver con una confrontación con el régimen y más con la puesta en marcha de un proceso de recuperación del sentido de identidad de las organizaciones políticas.

Es por ello que a partir del comienzo de 1984 los principios de la movilización descansan mucho más en los actores sociales populares, desprovistos de una orientación política definida y preocupados por resolver problemas muy

⁶ Los "cacerolazos" son ya una forma típica de protesta civil, particularmente identificada con las clases medias. En efecto, desde sus primeras manifestaciones en Chile, por octubre de 1972, hasta las más recientes en mayo-junio de 1983, pasando por algunos imitadores en Brasil, el hecho de hacer sonar las cacerolas en la oscuridad de las noches santiaguinas ha tenido efectos más que significativos como forma de cuestionamiento político. Está pendiente el estudio sistemático de su connotación, dado que sus implicaciones no están sólo ligadas, obviamente, a la sobrevivencia material de los grupos sociales que lo utilizan.

concretos, que en los partidos políticos, dedicados a recuperar el espacio institucional hasta ahí ocupado por los militares. Es a partir de esta imagen global de lo ocurrido durante el lapso 1983-1984 que podemos plantear una reflexión más específica referida a los cambios que pueden explicar lo sucedido con el carácter de la movilización social en Chile.

LA RECONSTITUCIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO

Consideramos que, desde el punto de vista analítico, la innovación principal de la coyuntura actual tiene que ver con la distancia que la derecha política ha tomado con relación al régimen militar. Algunos de sus jefes, que pertenecen a la derecha "republicana", para diferenciarla de las otras dos derechas, la "gremialista" y la "nacionalista", ambas comprometidas con los militares, participaron en las jornadas nacionales de protesta.⁷ Esto muestra un comienzo de ruptura de la base social de los militares y presenta una alternativa política para los empresarios industriales y los propietarios rurales descontentos con una situación que achacan a la política económica liberal.

Por otro lado, el éxito de una organización como el Proyecto de Desarrollo Nacional (PRODEN), dirigido por un hombre que pretendió salirse del cauce de los partidos políticos (Jorge Lavanderos) y que fue violentamente reprimido, permitió que personas tan disímiles como el ex general Gustavo Leigh, antiguo integrante de la Junta Militar, el presidente de la Asociación de Productores de Trigo, Carlos Podlech, y el presidente de la CTC, Rodolfo Seguel, se sentaran en la misma mesa; la concretización del planteamiento del PRODEN, mostró en la coyuntura del inicio de 1983 que el carácter heterogéneo de la composición social de la movilización podía servir de base a un proyecto político poco ortodoxo.⁸

Sin embargo, cuando la Democracia Cristiana (DC) decidió jugarse a fondo hacia fines del primer semestre de 1983, las bases estaban dadas para la reconstitución del sistema institucional en su versión original. La constitución de la *Alianza Democrática* (AD), encabezada por la DC e integrando a radicales, socialistas democráticos y a la derecha "republicana", fue la respuesta orgá-

⁷ Las diferencias entre las tres "derechas" son las siguientes: mientras la derecha republicana trata de recuperar la herencia histórica de liberales y conservadores, que favorecieron el régimen democrático representativo, la derecha gremialista y la derecha nacionalista son variaciones de grupos que de una manera u otra apoyan al régimen militar: los unos porque favorecen una estructura de intermediación formada por estamentos provinciales, élites de todo tipo (empresariales, profesionales) y organizaciones sociales como sindicatos. Los otros, porque favorecen una estructura de apoyo de masas cuya cercanía con un modelo fascista podría demostrarse. No cabe duda que ambas derechas tienen bases sociales distintas: la gremialista está más cerca de grupos medios altos, profesionalizados pero excluidos de la oligarquía que sería republicana, y la nacionalista sería claramente una lumpen burguesía de clases medias bajas.

⁸ Para una exposición detallada del proceso de generación de las nuevas agrupaciones políticas, véase Sergio Spoerer, "Chili 1981-1983: Crise institutionnelle et acteurs socio-politiques", *Problèmes d'Amérique Latine*, núm. 72, 1984.

nica del sistema político a la iniciativa espontaneísta del PRODEN. La AD pudo desempeñar el papel de animador de las manifestaciones populares de ahí en adelante y definirse como el interlocutor del régimen cuando éste decidió nombrar al viejo político derechista Sergio Onofre Jarpa como ministro del Interior. No obstante, debido a la ausencia de cohesión dentro del propio régimen y al maximalismo de la AD, el tan mencionado “diálogo” no tuvo mayores consecuencias.

Lo único que faltaba para que el cuadro estuviese completo era que la izquierda recuperara su lugar en el sistema político. Fue lo que ocurrió en octubre cuando se constituyó el *Movimiento Democrático Popular* (MDP), que integró a los partidos socialista y comunista en su versión más ortodoxa. Además, en paralelo, se constituyó el *Bloque Socialista* que agrupa a antiguos miembros de los partidos de izquierda pero con base en planteamientos más pragmáticos y menos ideológicos de lo que el MDP hubiera estado dispuesto a aceptar. Incluso el Bloque adhiere a la AD y no al MDP, lo cual ilustra mejor su orientación. De esta forma, quedó planteado el sistema político en su versión actualizada.

De ahí en adelante, el carácter de las jornadas nacionales de protesta, sin perder su arraigo popular, estuvo más y más marcado por la presencia de los partidos constitutivos del sistema político. A pesar de las transformaciones que habían tenido lugar en la estructura social y que calaban hondo, y a pesar del esfuerzo del régimen militar para erradicar la política, ésta pareció reencontrarse durante el verano de 1984 lo que había estado diez años en hibernación.

La reconstitución del sistema político y la reaparición de algunos integrantes de la clase política están vinculadas a la reconstitución de esquemas ideológicos cuya relevancia actual puede prestarse a discusión. En efecto, la reivindicación de la democracia (que incluye el fin a la represión, a la dictadura política y la reformulación del sistema institucional), reemplazó las reivindicaciones tradicionales en favor de mejoramientos en el nivel de vida y en la distribución del ingreso o la generalización de beneficios como la seguridad social. La democratización aparece como reivindicación central en la medida que se concibe como el remedio al deterioro económico y al autoritarismo político. Y va acompañada de un proyecto ideológico centrado en la noción de “consenso”, cuya connotación básica es la existencia de una unidad cultural de valores que van más allá de los intereses de clase y que permitirían la superación de las divisiones paralizantes que han afectado al país en las últimas tres o cuatro décadas.⁹ El logro del consenso permitiría la articulación de grupos sociales con intereses de clase distintos y se justificaría sobre todo por los efectos de

⁹ El proyecto ideológico alrededor de la noción de “consenso” tiene apoyos en la obra del historiador Gonzalo Vial (*Historia de Chile: 1891-1973*, Santiago, Editorial Santillana, 1982), en la que se defiende la hipótesis según la cual gran parte de lo ocurrido en Chile durante el siglo XX no es sino la historia de la pérdida de dicho “consenso”, no sólo al nivel de la organización política sino también en términos culturales. Dicho proceso llevó eventualmente al golpe de Estado en 1973. Véase también Eugenio Tironi, “Consenso, crisis y reedificación democrática”, *Proposiciones*, tomo X, 1983.

Cuadro 4

El sistema político chileno en 1973 y en 1984

<i>Organizaciones políticas según su orientación (1984)</i>	<i>Alianzas entre organizaciones en 1984</i>	<i>Votos en las elecciones parlamentarias de marzo de 1983</i>		
		<i>Partido</i>	<i>Votos</i>	<i>%</i>
<i>Derecha</i>				
Partido Nacional (PN)(Carmen Puelma, Sergio Onofre Jarpa)		PN	777 084	21.1
		CODE	33 918	0.9
Gremialistas (Unión Democrática Independiente UDI) (Sergio Fernández, Jaime Guzmán)		PIR	65 120	1.8
		DR	70 582	1.9
Nacionalistas (Pablo Rodríguez)				
Social-cristianos (William Thayer, Juan de Dios Carmona)				
<i>Centro</i>	<i>Alianza Democrática (AD)</i>			
Derecha Republicana (DR) (Hugo Zepeda)	Incluye: DC + DR + SD + PR + PSCH (Briones) + MAPU OC	DC	1 049 676	28.5
		PR	133 751	3.6
		API	29 977	0.8
		IC	41 432	1.1
		MAPU	90 620	2.5
Democracia Cristiana (DC) (Gabriel Valdés, Andrés Zaldívar)				
Partido Radical (PR) (Ánselmo Sule, Enrique Silva Cimma)				
Social-demócratas (SD) (Luis Bossay)				
<i>Izquierda</i>	<i>Bloque Socialista (BS)</i>			
Partido Socialista de Chile (PSCH) (Carlos Briones) incluyendo: Sector almeydista (Stuardo) + Altamirano + "suizos" (R. Lagos) + "humanistas" (A. Rodríguez) + Grupo Consenso + MAS (Mena) + M. Mandujano	Incluye: PSCH (Briones) + MAPU + GCS + IC + MAPU + OC	PSCH	678 674	18.4
		USOPO	10 371	0.3
		PC	595 829	16.2
Partido Socialista de Chile (PSCH) (Clodomiro Almeyda) incluyendo: PS 24º Congreso + Coordinadora de Regionales	Movimiento Democrático Popular (MDP)			

Cuadro 4 (continuación)

<i>Organizaciones políticas según su orientación (1984)</i>	<i>Alianzas entre organizaciones en 1984</i>	<i>Votos en las elecciones parlamentarias de marzo de 1983</i>		
		<i>Partido</i>	<i>Votos</i>	<i>%</i>
Izquierda Cristiana (IC) (Luis Maira)	PSCH (Almeyda) + PC + MIR			
Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) (Jaime Gazmuri)				
MAPU Obrero y Campesino (MOC) (Óscar Antonio Garretón)				
Grupo por la Convergencia Socialista (GCS) (Manuel Antonio Barretón)				
Partido Comunista de Chile (PC) (Luis Corvalán)				
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) (Andrés Pascal)				
		Nulos y blancos	57 770	1.6
		Votantes	3 680 307	100.0
		(Registrados:	4 510 060)	
		(Abstenciones:	829 753)	

compensación que se revelan indispensables para superar la desagregación, la segmentación y las rupturas provocadas por el régimen militar en la estructura social del país. En realidad, lo que se busca es descalificar cualquier concepción de la sociedad chilena en donde las clases desempeñen el papel explicativo fundamental de la trayectoria política de Chile. Incluso se trata de afirmar que una concepción de ese tipo constituye un obstáculo en el camino del objetivo del derrocamiento del régimen militar. Por lo cual, el análisis de la sociedad chilena en términos de las dinámicas de las relaciones de clase se contraponen a otro en el cual la afirmación de la unidad nacional se constituye en el cemento de una alianza social que permita romper o al menos asegurar un contrapeso a la penetración del discurso "patriótico" difundido desde 1973 por los militares en el poder. La afirmación de la unidad nacional en un contexto de crisis económica permite sentar las bases de un nuevo consenso nacional en el que se privilegia la dimensión política (o cultural) y se trascienden los esquemas divisivos de la sociedad chilena, primero entre militares y civiles y segundo entre las clases fundamentales. Con esto se pretende encontrar la base de legitimación mínima que permita la salida de los militares del gobierno.

No obstante, dicho proyecto se frustró, ya que la movilización no fue lo suficientemente fuerte como para fundamentar un poder de negociación de los partidos políticos con el régimen militar. La separación de los actores sociales y de los actores políticos desembocó en una situación en que los primeros rebasaron la capacidad de los segundos para convertirse en interlocutores de los

militares. Apareció así un cuadro insólito en el caso chileno: uno en el que la movilización social sobrepasó a los partidos, uno en el que la calle se convirtió en el escenario político, remplazando a las oficinas de los estados mayores de los partidos. Cuestión que el régimen militar aprovechó en su beneficio al poner en movimiento una campaña represiva muy intensa en poblaciones marginales, la que no pudo ser contrarrestada por la acción partidista. Fue así como a fines de 1984 las protestas dejaron de ser lo que habían sido, y el cuadro político chileno volvió al cauce que había tenido por los doce años anteriores. La manifestación final de que el círculo había dado una vuelta completa tuvo lugar el día en que el general Pinochet resolvió reorganizar su ministerio excluyendo a los ministros del Interior y de Hacienda que habían simbolizado, desde agosto de 1983, la "apertura" del régimen a las presiones sociales (febrero de 1985).

LAS BASES OBJETIVAS DE LA POLÍTICA DEL "CONSENSO"

Este afán tiene bases "objetivas". En efecto, los resultados de algunos estudios revelan que la sociedad chilena transforma su estructura en forma profunda.¹⁰ En áreas como el peso del proletariado industrial, la terciarización de las ocupaciones, la movilidad social categorial y no individual, el debilitamiento del sindicalismo organizado como actor de clase, los cambios en la relación entre dirigentes y dirigidos, no sólo en los sindicatos sino también en las poblaciones marginales y en los partidos políticos, se puede observar la aparición de modos distintos de articulación de los grupos sociales. La visibilidad de una estructura de clases bipolar, vigente históricamente en Chile, al menos desde fines del siglo XIX, se hace difícil mientras que se desarrolla una estructura atomizada, poco plasmada, constituida por casi un millón de personas que no tienen domicilio ocupacional estable.

En cuanto al peso del proletariado industrial, algunos trabajos demuestran que ha disminuido, sobre todo porque en ramas económicas como la textil, la metalúrgica, la minería del carbón y del salitre o el transporte ferroviario, los despidos de personal, han sido parte de una reestructuración completa del aparato productivo. Sólo subsisten en forma íntegra dos o tres polos dinámicos, como son el cobre, la siderurgia y el petróleo, que concentran lo que queda de la antigua clase obrera y suman no más de 100 000 personas. Al mismo tiempo, aparecen nuevas categorías de trabajadores en el procesamiento de

¹⁰ Algunos de estos trabajos son: Guillermo Campero y José Valenzuela, *El movimiento sindical chileno en el capitalismo autoritario: 1973-1980*, Santiago, Instituto de Estudios Transnacionales (ILET), 1984; Javier Martínez y Eugenio Tironi, "La clase obrera en el nuevo estilo de desarrollo: un enfoque estructural", *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 2, 1982; Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC), *Sector informal: funcionamiento y políticas*, Santiago, 1981; PREALC, "Los trabajadores por cuenta propia en Santiago", documento preliminar, 1978; Jaime Ruiz Tagle, *El plan de empleo mínimo: 1975-1982*, Programa de Economía del Trabajo (PET), Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, 1982.

la fruta de exportación o en la explotación maderera, sobrè los cuales poco se conoce. También se ha producido un proceso de regreso a las minas, dadas las inversiones hechas en El Indio, Disputada de Las Condes y en algunas industrias ligadas a la fruta y a la madera (conservas, muebles). Sin embargo, esta readecuación no absorbe sino una parte muy restringida de los que fueron despedidos en el sector industrial. Puede incluso plantearse una separación entre lo que ocurre en las grandes empresas estatales monopólicas, y en las medianas y pequeñas empresas industriales. En las primeras el impacto de las políticas liberales no ha sido del mismo tipo que en las segundas. Es decir, se ha intensificado el proceso de heterogeneización de la estructura ocupacional del país.

Y como si esto fuera poco, la terciarización del empleo, que ha ido en desmedro de las actividades productivas, revela una composición dual del sector servicios. Por un lado, tenemos aquellos trabajadores que se han incorporado a los servicios vinculados a las finanzas, a los bancos, a las empresas de transporte férrestre, cuya situación laboral forma parte del nuevo modelo económico que se pretendió implantar en el país. Por otro lado, observamos la aparición de dos fenómenos cuya importancia no debe subestimarse. Uno es el de la *desburocratización de las capas medias* y otro el de la *estatificación de la marginalidad*. ¿Qué entendemos por ello?

El primer fenómeno está vinculado a la reducción del empleo en el sector público que redundó en el despido de miles de personas en la salud, la educación y los servicios generales del Estado. Despidos masivos en la burocracia estatal dieron lugar al incremento del desempleo de "cuello blanco", que nunca había tenido un volumen tan alto como el que se produjo a partir de ese momento. Una parte de los desempleados pudo reincorporarse a la vida activa en los nuevos servicios financieros o las empresas de seguridad social que han aparecido. No obstante, parte importante continúa desarrollando tareas precarias, sin porvenir. Además, al atomizarse dicha población, la representación sindical que poseía se vino abajo. La antigua composición de las clases medias, íntimamente ligada al empleo gubernamental, sufre así modificaciones profundas cuyos efectos sobre el comportamiento político podemos sólo intuir.

El segundo fenómeno está ligado al desempleo de los obreros despedidos del sector industrial. Como continúan viviendo en las poblaciones marginales, que siempre los albergaron, al encontrarse cesantes perdieron la fuente de ingresos que les permitía subsistir. Los militares enfrentaron esta situación con la formulación de los planes de empleo mínimo¹¹ que recogieron a esta población cesante remunerándola por debajo de los salarios mínimos y rebajándola socialmente al hacerla desempeñar tareas como la limpieza de calles, la recolección de la basura, el plantío de árboles y otras tareas sin relación con la calificación que estos trabajadores poseían antes de experimentar esta nueva situación.

A partir de lo señalado es posible pensar que la dependencia tradicional

¹¹ Se pusieron en marcha los Programas de Empleo Mínimo (PEM) y de Jefes de Familia (POJH), cuya cobertura alcanza a 359. 071 personas, en marzo de 1985.

de las clases medias con respecto al Estado ha disminuido rápidamente mientras que la pérdida de la relación salarial por vastos sectores de la clase obrera modifica los términos del análisis del comportamiento político de la población. Ambos procesos son reflejo de uno más amplio, el cambio en la estructura de clases inducido por la reestructuración económica, que da lugar a una movilidad social masiva dentro y fuera del mercado de trabajo. No es posible asociar las transformaciones señaladas sólo a las que han tenido lugar en el sistema político sino que hay que aludir forzosamente a los cambios que han ocurrido en la sociedad civil.

Esto se confirma claramente cuando se considera el opacamiento del actor sindical dentro de la escena política. Los sindicatos, si bien han actuado y se han movilizado en el marco de las jornadas nacionales de protesta, no poseen hoy una influencia equivalente a la que tenían en el pasado. La respuesta gubernamental a las protestas, en términos de despidos, ha debilitado las posiciones de la clase obrera, que debe soportar una política de represión sistemática sin poder contrarrestarla. Además, y sin que ello sea necesariamente negativo, la relación entre el liderazgo y la base obrera en sectores como el cobre o el acero se ha transformado. Los dirigentes deben ahora buscar periódicamente la renovación de su mandato, el cual ya no es renovado a través de presiones derivadas de adhesiones partidistas.¹² Los líderes sindicales se colocan así frente a una base que reclama y reafirma su derecho al otorgamiento de la legitimidad de su representación.

Otra dimensión de la complejidad del cuadro sindical es la relación entre la cúpula dirigente del sindicalismo y las autoridades militares. En años recientes se hace cada vez más difícil para esta cúpula negociar en nombre de los trabajadores chilenos considerados como un conjunto, ya que los militares conocen la debilidad del mandato que dicha cúpula tiene en la base y saben, además, que continúa respondiendo ante los partidos políticos. Ni la Coordinadora Nacional Sindical ni la CTC pueden plantear una posición que pudiera, en un momento dado, representar a la totalidad de la clase.

Y ello no porque no quieran sino más bien porque la heterogeneidad que ha adquirido la estructura ocupacional, junto con la represión que ejerce el régimen contra cualquier intento de movilización de la clase obrera, impiden los pasos de organización que deben hacerse para lograr dicho propósito. Por lo cual, y derivado de los hechos mencionados —represión y despidos, cambio en el tipo de vínculo dirigentes-base, pérdida de influencia del discurso cupular— no es fácil esperar que el sindicalismo esté en el origen de una fuerza renovadora del panorama político.

¹² Véanse Óscar MacClure e Iván Valenzuela, "Conflictos en la gran minería del cobre (1973-1983)", Documento de Trabajo, CEDAL, Santiago de Chile, mayo de 1985; Rodrigo González y Alonso Daire, "Los paros nacionales en Chile (1919-1973)", Documento de Trabajo, CEDAL, Santiago de Chile, noviembre de 1984.

CONCLUSIONES

Las razones por las cuales ni la crisis económica iniciada en 1981 ni la movilización social del período 1983-1984 fueron capaces de poner fin al régimen militar han sido discutidas aquí. Hemos tratado de precisar que el modelo económico puesto en práctica por el régimen, si bien enfrenta problemas muy graves, ha puesto en marcha inversiones que pudieran hacerlo más sólido de lo que se podía suponer o, en el peor de los casos, pueden ser capaces de asegurarle una estabilidad que no habría tenido si ellas no hubiesen existido. Por otro lado, hemos constatado que la apertura política, forzada por la movilización popular, sirvió más para reconstituir un sistema político cuyas características fundamentales volvieron a expresarse como si poco o nada hubiese ocurrido en los últimos doce años. El esfuerzo por romper con la división ideológica entre los partidos y la dificultad en hacer operativas las alianzas que se trataron de construir durante el período en cuestión, no prosperó. Al final de 1984 nos encontramos con un cuadro político que, en lo fundamental, es decir en sus principales expresiones organizadas, no es distinto del que existía en la víspera del golpe de Estado de 1973. Es por ello que el foco de la atención pública, tomando conciencia de la debilidad de la oposición al régimen, se desplazó hacia el propio gobierno. Es así como, paradójicamente, observamos que las expectativas respecto de un cambio en la situación política están referidas a lo que harán las autoridades y no a qué hará la oposición. La expectativa de la expedición de las leyes políticas (del registro electoral,¹³ de los partidos políticos, etc. . .) por parte de comisiones *ad-hoc* en donde sólo participan adherentes al régimen, y la expectativa de la liberalización de las disposiciones constitucionales en materia de libertad de expresión y otras. Así, inesperadamente, la iniciativa ha pasado a manos del gobierno que ha conseguido relegitimarse en sus propios términos. La transición será la que el régimen quiera, al ritmo que éste fije y con las características que sus ideólogos deseen. Sólo una agudización extrema de la crisis económica o cambios radicales en la correlación de fuerzas dentro de las instituciones armadas podrían hacer variar esta conclusión.

¹³ Un buen análisis de esta situación es el de *The Economist* (24 de noviembre de 1984), "Pinochet Won't Go, Unless Chile's Politicians Create a Viable Alternative".